

**Rama Judicial del Poder Publico**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

D.E.I.P de Barranquilla, veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

Radicado	08-001-3333-006-2021-00025-00
Medio de control	Acción de Tutela
Demandantes	Manuel Enrique Orta Ramos
Demandadas	Ministerio de Vivienda
Jueza	Lilia Yaneth Álvarez Quiroz.

**I. Asunto a decidir**

Procede el Despacho a resolver la acción de tutela interpuesta por el señor Manuel Enrique Orta Ramos, quien actúa en nombre propio, en contra del Ministerio de Vivienda, al estimar vulnerado su derecho fundamental de petición.

**II. Hechos narrados por el Accionante**

1. Que el 17 de noviembre de 2020, presentó derecho de petición, ante el Ministerio de Vivienda a través del correo [correspondencia@minvivienda.gov.co](mailto:correspondencia@minvivienda.gov.co) con el fin de solicitar que se reactivará el auxilio dado por el gobierno como alivio al pago de las cuotas de los créditos hipotecarios.
2. A la petición presentada el Ministerio de Vivienda le asignó el radicado N° 2020ER0134446; la solicitud anterior, fue reiterada el 28 de diciembre de 2020, ante la falta de respuesta por parte de la hoy accionada.
3. Que desde la fecha de radicación hasta la presentación de esta acción de tutela han transcurrido 85 días sin que se haya dado una respuesta de fondo a la petición presentada.

➤ **Pretensiones del Accionante.**

1. Solicita se tutelen los derechos fundamentales invocados, a la petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución política y que en un término perentorio la accionada haga efectiva la respuesta sobre la petición presentada.

➤ **Actuación Procesal**

Esta unidad judicial, mediante proveído de fecha 16 de febrero de 2021, aprehendió el conocimiento de la acción de tutela ordenando su admisión,<sup>1</sup> de acuerdo a lo establecido por el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, notificándose a las partes el día 17 de febrero de la misma anualidad a los siguientes correos electrónicos; por parte del accionante se envió comunicación al correo señalado en la demanda de tutela [letimaos1953@hotmail.com](mailto:letimaos1953@hotmail.com), y al accionado al correo aportado por el accionante [notificacionesjudi@minvivienda.gov.co](mailto:notificacionesjudi@minvivienda.gov.co), de igual manera se notificó a la defensoría del Pueblo.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Archivo N° 04 Expediente Digital (Auto Admisorio Tutela)

<sup>2</sup> Archivo N° 05 Expediente Digital (Constancia de notificación admisión)

➤ **Informe entidad accionada Ministerio de Vivienda**

Se recibió informe de la entidad accionada en fecha 18 de febrero de 2021, mediante oficio N° 2021EE0014028 en los siguientes términos:

*“Manifiesto a su señoría que revisado que en el Sistema de Gestión Documental de este Ministerio –Gesdoc- el ciudadano a Manuel Enrique Orta Ramos identificado con la CC.No.72126744 ha presentado dos (2) solicitudes relacionadas con el subsidio de vivienda. Que presentó escrito radicado bajo el número No.2020ER0134446 y 2020ER0117856, los cual fue respondido oportunamente y de fondo por el Director Ejecutivo de Fonvivienda, mediante radicado No. 2021EE0013974, de fecha 18/02/2021, enviado y entregado al peticionario, en el correo: letimaos1953@hotmail.com y rujz15@hotmail.com, con lo cual se tiene un hecho superado. A este radicado se refiere la accionante en la presente tutela. Se anexa copia del radicado de respuesta y de los correos enviados.*

*De otra parte, se consulta información histórica de cedula No. 72126744, del ciudadano Manuel Enrique Orta Ramos y aparece que éste no se ha postulado en convocatorias para subsidio de vivienda ante fonvivienda.*

*Por lo que solicita a la Señora juez, respetuosamente que DENIEGUE el amparo solicitado por el accionante, advirtiendo que el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO dio respuesta oportuna y de fondo a las peticiones incoadas por el ciudadano Manuel Enrique Orta Ramos identificado con la CC.No.72126744.*

*Agrega la entidad que el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO NO es el ente encargado de otorgar la ayuda humanitaria de emergencia, ni indemnizaciones por concepto de desplazamiento forzado y tampoco es la entidad encargada de coordinar, asignar y/o rechazar los subsidios de vivienda de interés social; éstas funciones corresponden respectivamente, de manera exclusiva a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL), hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y al Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y a otras entidades.*

Como pruebas aportadas por la entidad accionada se relacionan las siguientes<sup>3</sup>:

1. Copia de los pantallazos del Gesdoc.
2. Copia del radicado de respuesta No. 2021EE0013974.
3. Copia del correo enviado a: letimaos1953@hotmail.com y [rujz15@hotmail.com](mailto:rujz15@hotmail.com)
4. Copia de la consulta histórica de cedula No. 72126744.

<sup>3</sup> Archivo N° 9 Expediente Digital (Soportes Acción de tutela)

### III. Consideraciones del despacho

#### ➤ Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, este Juzgado es competente para conocer del amparo invocado, por ocurrir en esta ciudad los hechos que lo motivan al ser el domicilio del accionante, lugar en donde este Juzgado ejerce su Jurisdicción Constitucional.

#### ➤ Problema jurídico que se plantea

En el presente caso, el Juzgado deberá resolver si existió omisión en la respuesta al derecho de petición presentado por el accionante Manuel Enrique Orta Ramos, y de encontrarse probada dicha omisión si se vulneraron los derechos fundamentales a la petición, por parte de la entidad Ministerio de Vivienda.

#### ➤ Antecedentes Normativos y Jurisprudenciales aplicables al caso

##### - Generalidades de la acción de tutela

La tutela, es un mecanismo concebido por la Constitución de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando estos resulten amenazados o vulnerados, por la acción u omisión de cualquier autoridad o de un particular, con las características previstas, en el inciso final del artículo 86 de la Carta Política.

Para la procedencia de la acción, es necesario que el afectado no disponga de otro medio de defensa para hacer valer sus derechos, salvo que la ejerza como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, siendo en todo caso, claro está, la existencia de una acción u omisión de la autoridad pública, la que pueda configurar la violación del derecho fundamental, cuyo amparo se pretende.

La petición es un derecho que la **Constitución Nacional en su artículo 23**, ha concedido a los ciudadanos, para que estos puedan presentar peticiones a las autoridades, y se les suministre información sobre situaciones de interés general y/o particular.

##### - Del derecho fundamental de petición y su núcleo esencial

Textualmente el artículo 23 de la constitución nacional contempla:

*“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.*

Los particulares pueden solicitar y tener acceso a la información y documentación que repose en las diferentes entidades, siempre y cuando no se trate de información que, por ley no tengan el carácter de reservados, caso en los cuales no procede el derecho de petición.

A su vez, la **Ley 1755 de junio 30 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”**, consagra los siguientes preceptos jurídicos:

**“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades.** Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación”.

**“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.** Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. **Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción.** Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes (...). Negrita

**“Artículo 23. Deberes especiales de los personeros distritales y municipales y de los servidores de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.** Los servidores de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, así como los personeros distritales y municipales, según la órbita de competencia, tienen el deber de prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición. Si fuere necesario, deberán intervenir ante las autoridades competentes con el objeto de exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales. Así mismo recibirán, en sustitución de dichas autoridades, las peticiones, quejas, reclamos o recursos que aquellas se hubieren abstenido de recibir, y se cerciorarán de su debida tramitación”.

Igualmente, en el supuesto que usted considere que no es el funcionario competente para absolver esta petición, se sirva remitirla al funcionario competente tal como reza el **artículo 21 de la Ley 1755 de 2015**, que al respecto plasma:

**“Artículo 21. Funcionario sin competencia.** Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remitatorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se



contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.”.

Por su parte la Honorable Corte Constitucional ha señalado en sentencia T-206 de 2018, con Magistrado Ponente el Dr. Alejandro Linares Cantillo lo siguiente:

*“Este Tribunal ha considerado que la acción de tutela es el mecanismo procedente para determinar la violación del derecho de petición. En esa dirección, la sentencia T-084 de 2015 sostuvo que “la tutela es un mecanismo idóneo para proteger el derecho de petición de los administrados, toda vez que por medio del mismo se accede a muchos otros derechos constitucionales”. **De acuerdo con lo anterior, la Corte ha estimado “que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo”.***

La Honorable Corte Constitucional, ha indicado el alcance del derecho fundamental de petición y ha manifestado, que la respuesta a la solicitud debe: (i) ser pronta y oportuna; (ii) resolver de fondo, de manera clara, precisa y congruente la situación planteada por el interesado; (iii) y, finalmente, tiene que ser puesta en conocimiento del peticionario.

En el evento, que la respuesta emitida por el ente requerido carezca de uno de estos tres presupuestos, se entenderá que la petición, no ha sido atendida, conculcándose el derecho fundamental<sup>4</sup>.

En tal sentido, la alta Corporación, se ha pronunciado<sup>5</sup>, señalando:

*“El incumplimiento de cualquiera de estos ingredientes conllevará a la vulneración del goce efectivo de la petición, lo que en términos de la jurisprudencia conlleva a una infracción seria al principio democrático. Al respecto la sentencia T-377 de 2000 expresó:*

*“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.*

*b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.*

*c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.*

*d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.*

<sup>4</sup> Corte Constitucional, sentencia T - 490 de 2007

<sup>5</sup> Sentencia de tutela de 1º de abril de 2013, expediente T-3674925, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. (...)

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.”

Así, la respuesta de la administración debe resolver de manera precisa y completa, el escrito sometido a su consideración<sup>6</sup>, además debe ser dada a conocer, por ende, no se tiene satisfecho este derecho cuando la entidad, responde evasivamente o se limita a la simple afirmación, de que el asunto se encuentra en revisión.

La comunicación de la respuesta a la petición se puede dar por diversos medios, siendo normalmente utilizada la notificación por correo certificado; sin embargo, también es permitido que la misma, se haga a través de medios electrónicos o digitales, siempre que el peticionario tenga facilidad de acceso a éstos y así lo acepte.

#### **- Carencia actual de objeto por hecho superado**

El hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional<sup>7</sup>, ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela. Es decir, el hecho superado significa la observancia de

<sup>6</sup> Ver sentencia T -166 de 1996, donde se señaló: “... ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido de sostener que el derecho de petición no se ve satisfecho simplemente porque la autoridad ante la cual se eleva la solicitud se limite a responder y menos a acusar recibo, sino que debe producirse una respuesta que guarde relación con lo solicitado, sin que ello implique necesariamente, que ella deba ser favorable; es decir, que el funcionario competente está en la obligación de analizar a fondo la petición para emitir una respuesta que guarde relación directa con lo solicitado en la misma”

<sup>7</sup> Cfr. Sentencia T – 011 de 2016.

las pretensiones del accionante a partir de una conducta desplegada por el agente transgresor.

Se diferencia del daño consumado, en cuanto este, tiene lugar cuando “la amenaza o la vulneración del derecho fundamental han producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela. La configuración de este supuesto ha sido declarada por la Corte, por ejemplo, en los casos en que el solicitante de un tratamiento médico fallece durante el trámite de la acción como consecuencia del obrar negligente de su E.P.S., o cuando quien invocaba el derecho a la vivienda digna fue desalojado en el curso del proceso del inmueble que habitaba”<sup>8</sup>.

**- Análisis del caso concreto frente a la vulneración invocada**

Tal como se mencionó en el problema jurídico, corresponde a este despacho judicial determinar, i) si la parte accionada dio o no contestación al derecho de petición radicado por el actor en fecha 17 de diciembre de 2020, en caso afirmativo ii) si este se hizo dentro del término de ley (15 días) y iii) si dicha respuesta se ajusta a las exigencias antes anotadas establecidas por la Honorable Corte Constitucional para tener por satisfecho el derecho, sin que ello implique que la respuesta deba ser a favor del peticionario, sino que se resuelva claramente y oportunamente de fondo lo pedido.

De conformidad con las piezas documentales aportadas al proceso, se encuentra acreditado que el señor MANUEL ENRIQUE ORTA RAMOS, presentó una petición al MINISTERIO DE VIVIENDA el día 17 de diciembre de 2020, reiterada el día 28 de diciembre de la misma anualidad, en la que solicitaba la reactivación del auxilio dado por el gobierno como alivio al pago de las cuotas de los créditos hipotecarios.

También se encuentra demostrado que mediante Oficio N° 2021EE0013974, de fecha 18 de febrero de 2021, El Ministerio de Vivienda da respuesta a la petición realizada por el accionante y además, que dicho oficio fue puesto en conocimiento del mismo a través del correo electrónico suministrado en la petición. El mencionado oficio señala entre otras cosas:

*“ En atención a la petición planteada mediante el radicado del asunto, en la cual solicita continuar con el beneficio de la tasa, debido a que incurrió en mora en el pago de las cuotas de su crédito, respetuosamente me permito informar que la aplicación de las circulares externas emitidas por la superintendencia financiera contemplan la validación de las condiciones crediticias de los deudores, para lo cual el Gobierno Nacional mediante Decreto 493 de 2020 y Resoluciones de Fonvivienda 718 y 803 de 2020, estableció las condiciones para la aplicación de periodos de gracia en créditos con cobertura.*

(...)

*Adicionalmente, es importante resaltar que la responsabilidad de la validación de las condiciones de acceso y permanencia del beneficio de tasa de interés, le corresponde únicamente a los establecimientos de crédito, por tal razón, debe validar directamente con Davivienda el cumplimiento de las condiciones de su crédito para aplicarles periodos de gracia en el pago de su obligación sin que esto implique la pérdida del beneficio”*

<sup>8</sup> Ibid.



Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que, una vez notificado el auto admisorio de la presente acción de tutela, el Ministerio de Vivienda, procedió a emitir y enviar respuesta al señor Manuel Enrique Orta Ramos, al correo electrónico suministrado para tal fin [letimaos1953@hotmail.com](mailto:letimaos1953@hotmail.com) , con radicado de salida 2021EE0013974, de fecha 18 de febrero de 2021, en la cual se brinda respuesta de fondo de acuerdo con las pretensiones requeridas.

En ese orden de ideas esta judicatura ha considerado que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando al momento de proferirla, se encuentra que la acción u omisión que dio origen a la solicitud de amparo, ha cesado, pues desaparece toda posibilidad de amenaza o vulneración a los derechos fundamentales.

En este sentido, cuando hay carencia de objeto la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir alguna orden dirigida a proteger el derecho fundamental invocado.

El hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.

Por lo tanto, al haberse brindado la respuesta al accionante del derecho de petición en fecha 18 de febrero de 2021, tal como se encuentra acreditado en el expediente, cesó la vulneración alegada, y se configura un hecho superado, por lo que este despacho no entrará a pronunciarse de fondo ni a dictar ningún tipo de orden al respecto.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Barranquilla, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

## **RESUELVE:**

**PRIMERO: DECLARAR** la carencia de objeto por hecho superado respecto al derecho fundamental a la Petición del señor MANUEL ENRIQUE ORTA RAMOS, contra el



MINISTERIO DE VIVIENDA, de conformidad a las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

**SEGUNDO:** Notifíquese el presente proveído por el medio más expedito a las partes, y a la Defensoría del Pueblo.

**TERCERO:** Remítase el expediente con todos sus anexos a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado el presente fallo.

## **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**LILIA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ**

**Jueza**

**L.P.M**

**Firmado Por:**

**LILIA YANETH ALVAREZ QUIROZ**

**JUEZ CIRCUITO**

**JUZGADO 006 ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BARRANQUILLA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0975ab240b66155118147c01176727ac6e477c3b941323d25137a9c288d6256d**

Documento generado en 25/02/2021 02:10:20 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**